

0037

AUTOS: “ALDEROTTI, ROQUE Y OTROS C/ GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO -ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO NRO. 36.197 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016” - FICHA 1- 42/2018.

Suprema Corte de Justicia:

1) El primer punto a considerar refiere a la legitimación activa de los accionantes; al respecto, si bien la normativa cuestionada no regula una actividad que los mismos desarrollan directamente, bien es verdad que, y conforme lo admite al contraparte a fs.199, ejercitan la acción en tanto entienden que sus intereses se han visto lesionados por la regulación (que estiman inconstitucional) de una actividad de similar naturaleza. Por consiguiente, y otorgando primacía al derecho de los comparecientes a ejercer acciones en defensa de un interés legítimo, puede sostenerse -en sentido lato sensu- que éste se halla comprendido en la hipótesis de autos. Empero, por cuanto se dirá, en la hipótesis de autos este extremo no habilita, *per sé*, a otorgar legitimación activa a los pretensores .

2) Al respecto, es necesario advertir que la acción instaurada, de progresar, no podría concluir que la norma atacada le sea inaplicable a los actores , pues no existiría posibilidad jurídica de que ello se virtualizara de forma parcial a los comparecientes pero no al resto de los trabajadores del taxímetro.

De otra forma: jurídicamente no es posible instrumentar que la habilitación de un servicio prestado por particulares a través de plataformas electrónicas sea inoponible a ciertos operarios y no a todos ellos, salvo que se intaurare un accionamiento de tipo colectivo por vía de “representación fáctica” no prevista en nuestro ordenamiento positivo.

3) Es por ello que , si bien en esencia sí existe un interés de los actores en toda legislación que regule actividades similares o de competencia directa con la que ellos desarrollan, ello no basta, de por sí, para el progreso de la pretensión, pues la sentencia a recaer ha de ser efectivamente posible de ser aplicada al caso concreto. Y ,como viene se señalarse, ello no ocurre en infolios.

4) El obstáculo formal precedentemente señalado torna inútil el examen del mérito, en tanto, y como viene de señalarse, no existe posibilidad útil de que la regulación cuestionada pueda ser inaplicada exclusivamente a los accionantes, sin perjuicio de señalar que los fundamentos expresados apuntan en su mayoría a cuestiones de mérito o conveniencia o bien de resorte exclusivo del Órgano legislativo departamental (v.gr. sugiriendo determinado contenido a la regulación de marras), lo cual es jurídicamente improcedente.

5) Finalmente, debe observarse que la Junta Departamental no posee legitimación pasiva en autos, en tanto carece de personería para

representar al Gobierno Departamental, cualidad que pertenece al titular del Ejecutivo, es decir, al Intendente de Montevideo.

Por los fundamentos expuestos, esta Fiscalía estima que la parte actora carece de legitimación activa en autos, sin perjuicio de lo señalado en los nrales. 2 y 4 que anteceden.-

Montevideo, 12 de febrero de 2019.-

MA/ma/sa

Dr. Jorge Díaz Almeida
Fiscal de Corte y Procurador
General de la Nación